

Acontecimiento en primera persona.
La Revolución del '90 escrita por sus protagonistas
Eduardo Hourcade

Eduardo Hourcade es Investigador del CONICET y Profesor de la Universidad Nacional de General San Martín.

Resumen

Una mirada de «larga duración» a la revolución del '90 podría notar que dos ejes han caracterizado su interpretación como proceso político que abre la experiencia de la Argentina Moderna.

Los primeros escritos históricos sobre la Revolución del '90, fueron hechos por sus protagonistas y son relativamente bien conocidos. En el presente trabajo se vuelve sobre textos de Barroetafeña, del Valle y Alem para mostrar en primera persona cómo los revolucionarios interpretaron su propia acción.

Summary

1890's Revolution in Argentina has been interpreted by most historical reflections as a political crisis due to administrative moral corruption and to economical downfall. In this work the focus is aimed to the political forms of the crisis based on the writing that several of their leaders had printed shortly after the revolution failed, trying to expose the meaning attribute by the protagonist [Alem, del Valle y Barroetafeña] to their actions.

Perspectivas historiográficas

Una mirada de «larga duración» a la revolución del '90 podría notar que dos ejes han caracterizado su interpretación como proceso político que abre la experiencia de la Argentina Moderna. En primer lugar, es inequívoca la relación que una memoria cultural amplia –y que envuelve a la historiografía– ha establecido un vínculo necesario entre los acontecimientos del Parque y el surgimiento de la Unión Cívica Radical, y que en la práctica significa anudar un nexo entre Revolución-Democratización, tal vez sea una de las interpretaciones que esté por probar.

Otra dimensión que se ha generalizado sobre el '90, prefiere ver en la crisis bancaria y la falencia fiscal el anticipo de las crisis que Argentina repetiría con insistencia el siglo XX. Igualmente, la Revolución del '90 ha llevado siempre hacia interpretaciones sobre la corrupción, el nepotismo, la especulación y otros parecidos, en tanto síntomas de una carcoma moral instalada en el espíritu nacional, consecuencia disolvente del materialismo y, por tanto, contrafigura de todo discurso moralizante y ejemplificador.

Con más detalle, en el pasado, distintos momentos de nuestra historia fueron particularmente propicios para revisar los eventos de fines de julio de 1890. La primera instancia de revisión se vive inmediatamente luego de producida la revolución. Una de las paradojas de la Revolución del '90 es que habiendo sido derrotada podría pensarse que, en verdad, había resultado triunfadora. A pesar que el éxito de las armas no acompañó a los Cívicos, su acción provocó el desplazamiento completo del Juarismo y el encauzamiento de los asuntos colectivos por senderos considerados más seguros.

Tal paradoja, genialmente enunciada por el Senador Pizarro («La revolución está vencida, pero el gobierno está muerto»), no podía de ningún modo quitar el amargo sinsabor de quienes habían sido vencidos. Lo que dará impulso a la primera revisión de estos acontecimientos será, como ya observara Napoleón, la esquivada paternidad de una derrota. Como dijimos, en el mismo 1890 salen a la luz dos diferentes reconstrucciones de los sucesos del Parque que definen una línea de confrontación, la de civiles y militares. José Mendía, que valiéndose de un seudónimo, publica *La revolución. Su crónica detallada. Antecedentes y consecuencias*, se convierte en vocero de las opiniones del Gral. Manuel Campos, responsable militar del movimiento, que hacía su descargo y acusaba a las figuras civiles, especialmente a Leandro Alem, del fracaso. Esta publicación provocó otra réplica editorial, a cargo de Francisco Barroetaveña, igualmente dirigente del fracasado movimiento, pero entre los civiles. Barroetaveña convocó a Alem y a del Valle a escribir el relato de sus respectivas actuaciones, conformando un volumen que con el título *Unión Cívica. Obra oficial*, salió a luz a fines de 1890, conteniendo además toda una serie de documentos relevantes para lo que tal vez con exceso era denominada «obra oficial». El eje civil-militar de confrontación, de todas maneras permite apreciar una coincidencia profunda: ha sido el cansancio

moral de los protagonistas ante los vicios del Juarismo lo que los ha impulsado a una acción que conciben como regenerativa y en la que creen, al menos parcialmente, haber tenido éxito.

Los trabajos históricos realizados sobre la Revolución del '90, como no podría haber sido de otro modo, han tenido en cuenta de diversa forma a estos textos iniciales, que son entonces relativamente bien conocidos. Se nos ocurre, no obstante que es posible ejercer sobre los mismos un tipo de lectura algo distinta, centrada en los acontecimientos de 1890 y su inmediata aprehensión por los protagonistas, que por supuesto ignoraban que la derrota sufrida sería el punto de partida de un recorrido que los llevaría a entrar en la «Historia» por la puerta grande. Los artículos que reuniera Barroetaveña, nos permiten reencontrarnos con actores que hablan en primera persona de una experiencia que tenían muy a la vista. Evidentemente ello no los resguardaba, al contrario, de visiones parciales o intencionadas; en vez, los eximía de presentarse como augures de un futuro que entonces no alcanzaban a entrever, y que voluntaria o involuntariamente ha contaminado la manera de verlos como actores a casi toda la historiografía posterior. ¿Cómo no ver en el Alem de las jornadas de julio de 1890 a un organizador que ya pensara que en forjar un instrumento político tan intransigente que prefiriese romperse a doblarse?

En esta recuperación de la percepción de las primeras personas, donde también nos ha parecido posible incluir algunas referencias a Bartolomé Mitre, en parte por razones expositivas, podrían encontrarse tal vez algunas pistas de comprensión sobre una crisis económica y política sobre la que sería necesario volver con más extensión. Pese a que en la opinión pública las asociaciones contemporáneas entre corrupción, crisis financiera y de pagos externos, crisis de la representación política, de tanto en tanto la reclaman como antecedente, y pese también a que en los últimos años han aparecido textos que arrojan una nueva luz erudita sobre aspectos de la misma, es posible que la Revolución del '90 guarde aún su historiador.

Vivir y escribir la Revolución

Ya en el año 1890, aparecieron dos versiones de los sucesos revolucionarios que debían su pluma a los derrotados. Si bien estos textos son en cierto modo la continuación de los debates y confrontaciones que habían tenido lugar en el campo de los «revolucionarios» con su obvia carga de afrentas y amarguras, por otra parte, estos textos también nos introducen en una narración de primeras personas que aquí utilizaremos –junto a otros materiales– como clave de comprensión del fenómeno revolucionario que nos interesa.

El primer texto en hacer su aparición, lo hizo bajo el seudónimo JACKAL, que encubría al chileno José María Mendía, que militara en las filas de los revolucionarios, llegando a ser el escribiente del Gral. M. Campo durante el sitio del Parque de Arti-

llería. Su texto, *La revolución* (su crónica detallada). Antecedentes y consecuencias, pretendía exculpar al Gral. Campos por la derrota del movimiento haciendo recaer dichas culpas principalmente en Alem y algo más moderadamente en del Valle.

La publicación inspirada por el responsable militar del movimiento, estimuló una réplica que compiló Francisco Barroetaveña. Éste había sido también uno de los protagonistas del movimiento civil; activo organizador de los mitines juveniles que antecedieron la conformación de la «Unión Cívica», tendría también una larga vida política en el interior del radicalismo, que culminó con su candidatura vicepresidencial por el anti-personalismo en el año 1928. Como decíamos, Barroetaveña solicitó a Aristóbulo del Valle y a Leandro Alem el relato de sus respectivas actuaciones, las que sumadas a la propia daban forma a un volumen que llevaba el título de *Unión Cívica. Obra Oficial*. Publicado a fines de 1890, el mismo se completa con una serie de documentos que se integran por su carácter en cierto modo «orgánico» al movimiento.

Aunque se advierte en el conjunto de los textos un inevitable tono justificatorio y defensivo frente a las acusaciones recibidas, son no obstante ricamente informativos en cuanto a que dejan conocer algunos de los escollos que debió sortear la acción política de estos protagonistas para producir el movimiento revolucionario. Quedan a la luz una serie de aspectos que nos permiten interiorizarnos en la tecnología política que hizo posible tal resultado, al tiempo que nos dan una acabada representación de los recursos prácticos con que la misma contaba. El análisis que proponemos de estos escritos no apunta tanto al despliegue de argumentos o hechos que nos son más o menos bien conocidos, para preferir una observación más atenta de la tecnología a la que nos referimos antes. Son de particular interés las reflexiones relativas a la noción de «Juventud» como grupo social de acción y referencia; también las formas en que se describe la organización de una acción política que implicaba el derrocamiento de autoridades legales, y las relaciones entre civiles y militares, en el seno de las fuerzas revolucionarias, pero que también son extensibles al arco más amplio de las fuerzas enfrentadas.

FRANCISCO BARROETAVERÑA Y EL «CONFLICTO GENERACIONAL»

Debe recordarse que en agosto de 1889 se realiza el llamado «banquete de los incondicionales», por parte de un grupo de jóvenes que estaban allegados al Juarizmo y que lo apoyaban en su entusiasta carrera reformista. La modernización de Juárez Celman avanzaba vertiginosamente; en nombre de la superación de la política y la razón técnica como base de la decisión gubernativa se llevaba por delante los elencos preexistentes del PAN.

El presidente, enemistado con Roca y distante igualmente de Pellegrini, se rodeaba de nuevas figuras, entre otras el futuro reformador electoral R. Sáenz Peña, y valiéndose del incomparable poder estatal arreglaba a su antojo las «situaciones» provinciales con el objeto de elevar a su delfín político, R. Cárcano, a la sucesión. El

momento requería de adhesiones indubitables. Si bien entre los incondicionales es posible detectar una genérica identificación con la «creencia positivista» que le proporciona al grupo un marco ideológico homogeneizador, no resulta menos importante la voluntad de sus miembros de cerrar filas en torno al poder, cristalizando así una política de círculo.

Tal estado de cosas provoca la réplica escrita de Barroetaveña, que apostrofó a los homenajeados con un artículo que aparece en el diario *La Nación* con un título de clásicas resonancias «Tu Quoque Juventud (en tropel al éxito)», el 20 de agosto de 1889, o sea el mismo día del homenaje al presidente. Del mismo título y de las primeras páginas del escrito surge un tono que pensamos de interés subrayar. Barroetaveña se manifiesta poco entusiasta con que la juventud se lance así por las vías de la adhesión a una acción política determinada. Entiende que esto resulta en un comportamiento juvenil que favorece el posibilismo. «La juventud que así inmoló su energía cívica poniéndose bajo la dependencia de un poder cuyas órdenes se cumplen en silencio sin la menor objeción ¿realiza algún ideal formado en las aulas? ¿Practica algún principio usual en las naciones civilizadas que gozan de organización constitucional?» Tal comportamiento no parece ser digno de los jóvenes, por lo que exhorta a sus congéneres nacionales a adoptar el ejemplo de los estudiantes franceses enfrentados a Boulanger, o el de los estudiantes brasileños combatiendo al imperio. Pero, sostiene Barroetaveña, incluso en el caso que juzgase que la conculcación juarista debía ser enfrentada por medio de una acción política «blanda», ésta debería ser la conformación de clubes cívicos, el reclamo de sufragio, la oposición política franca y nunca tratar de obtener un lugar junto al poder a costa de la sumisión.

Para Barroetaveña «las adhesiones incondicionales como las que harán esta noche un grupo de jóvenes argentinos de la decadencia cívica ¿no son síntomas que nos demuestran un inmenso retroceso moral del pueblo y una completa perversión de ideas?» Su autor está seguro que tal retroceso no debe ser admitido, ni siquiera como hipótesis, y mantiene esperanzas de que a último momento «la altivez nacional indignada» paralice la lengua de los participantes del banquete, entre otras cosas porque conoce a varios de los participantes del banquete, tiene conciencia de sus buenas prendas personales y, más aún, con varios de ellos comparte una cariñosa amistad.

Sabemos que Barroetaveña, joven él mismo, pertenece igualmente a muchos de los ámbitos de encuentro de esta misma juventud incondicional. Ha sido educado primero en el Colegio del Uruguay, luego en la Facultad de Derecho de Buenos Aires; visitante del Club del Progreso, indudablemente su vida transcurre en los más o menos limitados espacios en que se constituye la experiencia social de los notables porteños. Ni qué decir sobre los nexos que unen esos espacios «privados» al espacio político nacional.

Barroetaveña nos cuenta que luego de su artículo fue visitado en su estudio por M. Sánchez Viamonte, por C. Zuberbhuler y C. Videla, quienes se apresuraron a felicitarlo y

le comunicaron que juntos con «muchos amigos de la Bolsa» querían organizar ahora otro homenaje, dirigido al autor del artículo. Barroetaveña rechaza la proposición por entender que aceptar un saludo en cierto modo simétrico al que su nota rechazaba, era una inconsecuencia con lo escrito, proponiendo, en cambio, aceptar la presidencia de un banquete de oposición a la actitud de los jóvenes juariztas.

Apuntemos especialmente la naturalidad con que Barroetaveña incorpora el apoyo de los «jóvenes de la Bolsa», especialmente para contrastarlo con la opinión que presenta a lo que más tarde será el movimiento revolucionario como reacción a la mercantilización de la política gubernista. Barroetaveña, en cambio integra a estos jóvenes de la Bolsa a la divulgación de la intención opositora entre los amigos «influyentes» que cada uno pudiera tener, estableciendo contacto privilegiado con los estudiantes de las Facultades y del Colegio Nacional. Pocos días más tarde vuelven a reunirse «como treinta jóvenes estudiantes de medicina, derecho, de Ingeniería, del Colegio Nacional, corredores de Bolsa y algunos médicos y abogados».

Comunicada a este grupo más ampliado de jóvenes la intención de convocar a una manifestación política antigubernamental, la iniciativa es recibida con gran entusiasmo y se comienzan a recibir nuevas adhesiones en número cercano al millar que provenían de parte de quienes Barroetaveña describe como jóvenes «estudiantes, del comercio, abogados, médicos, ingenieros, etc., de las principales familias de Buenos Aires y el Interior».

Si salimos del contenido explícito del programa de sufragio y democratización que contienen tanto el artículo de La Nación como el texto de las invitaciones a lo que finalmente sería un mitin, el ámbito de la convocatoria no excede los límites que «naturalmente» tiene la política porteña de entonces. La juventud de Barroetaveña son jóvenes de familia, con todo lo que ello quiere decir. Su preocupación por indicar a la juventud un nuevo camino, y con ello la apertura de un frente opositor de inesperadas proporciones, debe ser puesta en paralelo con algunas de las concepciones más nítidas del elenco juarizta.

Y por cierto que la noción de la juventud como fuerza política es una de ellas. La convicción que el pasado debe ser dejado rápidamente atrás y que para ello no hay mejor medio que una juventud que no ha vivido los combates de antaño y que está dispuesta a aceptar los precios y los desafíos del progreso. El combate político vendría a resultar un teatro de confronta generacional, donde las ideologías en pugna –la de la tradición y la del progreso– producen actores que las encarnan físicamente. Después de todo, el ahora candidato oficial a la presidencia pocos años atrás había sido elegido diputado por su provincia antes aun de alcanzar la edad reglamentaria. Los espacios donde reclutan adhesiones los «incondicionales» son los mismos en donde tomará forma la contestación anti-juarizta, incluso los mecanismos con los que se la pone en marcha inicialmente son equivalentes: la forma del banquete, es otra indicación de esta común pertenencia.

También se distingue la simetría de ambos grupos de jóvenes con respecto a su

pertenencia social. Forman parte de antemano en una «sociedad política» en la que no todos tienen un lugar. La vida política se lleva a cabo en una serie de espacios –ya anotados– en donde se participa en virtud de las credenciales de pertenencia que el mismo grupo otorga como mecanismo de auto-reconocimiento, en general por vía de familia aunque los criterios no sean uniformes. Esta «sociedad política» informal resume la «opinión pública», y el ritmo de las luchas por el poder estatal es en la mayoría de los casos la divergencia de opiniones y grupos en su propio seno. Por caso, el mismo Barroetaveña frecuenta otro ámbito más específicamente político y opositor: la tertulia en casa de del Valle, en cuyas conversaciones la política ocupa su parte, aunque junto a muchos otros temas: la historia, la literatura y las bellas artes, temas éstos más apropiados que el primero para los «hombres cultísimos» que la integran.

Señalamos estas coincidencias entre oficialismo y oposición, su medio común de interacción, con el objeto de subrayar mejor que su disidencia es en cuanto a las formas de modernizar la política, antes que una confrontación social y demanda de inclusión de sectores no integrados. Volveremos sobre estas cuestiones más adelante.

Llegada la hora de las denominaciones, los jóvenes opositores barajaron para luego descartar los títulos de «Asociación Nacional» y el de «Liga Patriótica», para asumir el que creían más adecuado a su carácter: Unión Cívica de la Juventud. Según Barroetaveña el cometido de la UCJ era «crear algo nuevo en política, que debía buscar el apoyo de los hombres expectables e influyentes pero independizándose del pasado, de los viejos partidos, de sus odios, rencores y ambiciones. En una palabra creíamos llegada la hora de proclamar un nuevo credo político de principios, que uniera a todos los hombres que no se hubieran plegado a la corrupción de la época y desplegar una nueva bandera que simbolizara unión, patriotismo, moral y libertad. Así la UCJ trazó con decisión una línea meridiana que separaba radicalmente nuestro pasado político de la nueva vida nacional».

La Unión Cívica de la Juventud, no obstante mantener su independencia y su objetivo político principal entre los jóvenes, hizo extensiva la invitación a «los prohombres influyentes de la oposición» para que hicieran acto de presencia, no obstante lo cual, Alem, del Valle, V. F. López, D. Gallo y P. Goyena fueron los oradores más destacados. Igual atención de los jóvenes concitaron notas de excusa por la inasistencia de B. Mitre y de B. de Irigoyen. Sin embargo, la descripción de Barroetaveña del acto del Jardín Florida, el 1º de setiembre de 1889, insiste en presentar a esta juventud, autónoma y con los rasgos ya antes comentados.

«El Jardín Florida estaba repleto de jóvenes animosos, inspirados por el más noble de los entusiasmos, el amor a la patria, a la libertad, a la dignidad nacional, ultrajadas por gobernantes mercaderes. Allí estaban la Juventud Universitaria de la Capital y representantes numerosos de la juventud de las provincias; allí había jóvenes de las profesiones liberales, abogados, médicos, ingenieros, del alto comercio, de las industrias; allí estaba la Juventud

Argentina apta para entrar a la vida pública con la frente alta e inmaculada. Y unidos en estas mismas aspiraciones, ocupaban ciertos palcos del teatro los hombres expectables del país. Cuando aquella asamblea se puso de pie a los acordes del Himno Nacional como elevándose del fango juarizta a las alturas históricas de la independencia, parecía un areópago de la dignidad argentina».

Barroetaveña intenta fundar un nuevo estilo de la sociabilidad política adecuado a la modernidad de los tiempos: dicha juventud recuerda a la independencia, a San Martín y a Rivadavia, pero el pasado resulta una referencia lejana del que se desprende una serie de imperativos de carácter ético, al tiempo que estas mismas tareas de la modernización imponen nuevas tareas y actitudes. En tal sentido, el Juarizmo es la continuidad de los viejos hábitos que deben ser quebrados por el fervor de la nueva generación.

BARTOLOMÉ MITRE Y EL ESPACIO POLÍTICO DE LOS «PROHOMBRES»

La constitución de la Unión Cívica de la Juventud resultó un acontecimiento de impacto político inmediato. Desde un punto de vista político, la misma ha surgido inesperadamente. Pese a la crisis económica que se expresa primordialmente por la depreciación del peso-papel, y el consecuente descontento de la opinión pública con el equipo presidencial, las posibilidades del mismo de controlar la sucesión parecían inmejorables. Tanto Pellegrini como Roca han tomado distancia de Juárez Celman en disconformidad sea con sus proyectos continuistas, sea con la política del «Unicato», pero ambos carecen de medios para bloquearlas, pese a su disgusto. El «banquete incondicional» no es sino un gesto más de la fortaleza política que acumula el presidente.

Este clima hace, como decíamos antes, al clima de sorpresa conque la organización de la Unión Cívica de la Juventud es recibida. Parece crear de golpe una «opinión pública», hasta entonces inexistente y que le da posibilidades de reagrupamiento a todo un elenco político desafecto del PAN y que se haya excluido de la participación en el sistema de poderes inaugurados por el roquismo. La misma estructura imaginada por Barroetaveña, dirigida por los jóvenes, aunque guardando también un lugar para los «prohombres», posibilitaba este punto de encuentro entre figuras políticas que hasta allí no alcanzaban a reunirse. Barroetaveña intentó organizar comités parroquiales de la unión juvenil, y que los notables de la oposición se adhirieran en cada circunscripción, manteniendo la dirección en manos de la juventud independiente. El experimento no tuvo éxito.

Dos razones se concitaron para ello. De una parte, la presión de los métodos habituales del situacionismo empeñados en ese momento más que en ningún otro en garantizar para sí mismos un registro electoral que lo hiciera «imbatible». La Nación de

noviembre de 1889 da frecuente cuenta de los incidentes. «Durante los primeros días de inscripción las juntas, ayudadas por la policía, impedían mañosamente el acceso a los atrios a los ciudadanos que no acreditaban su adhesión incondicional. De esta manera se obtenía la exclusión de los de la oposición independiente» (12/11/1889).

Todo el mes de noviembre es escenario de escaramuzas de distinta gravedad, pero al llegar mediados de diciembre, una congregación de los jóvenes independientes es atacada a balazos. El atentado logra su objetivo, en tanto Barroetaveña desiste de continuar con la fundación de los clubes opositores. En este punto es que igualmente comienza a profundizarse el acercamiento entre los nuevos dirigentes juveniles y la vieja guardia política, resabios tanto del mitrismo como del autonomismo porteño.

El diario La Nación había dado espacio y difusión a la iniciativa juvenil, aunque su director, especialmente invitado al encuentro del Jardín Florida había faltado a la cita por estar herido en el labio, lo que le impediría dirigir la palabra a los congregados. Bartolomé Mitre no parecía tener demasiado entusiasmo por una convocatoria que amenazaba con fundar una nueva fuerza política, de base generacional, y especialmente manifestaba su desacuerdo con el intento de Barroetaveña de subordinar a los «prohombres» a los intereses «independientes». El interés de la Unión de la Juventud por mantener el apoyo de Mitre y sobre todo de su diario, sumado a la gravedad de los enfrentamientos con la policía gubernista, terminaron por disuadir a Barroetaveña de la extensión «independiente» de la nueva fuerza política y su realineamiento con las tradicionales.

Bartolomé Mitre, siempre presente en el recuerdo porteño, quien se jactara de alcanzar los ministerios a cañonazos, más pacíficamente en los últimos quince años, cultiva desde las páginas de La Nación a un público que lo respeta, y mantiene una reducida fuerza política también ella más en reserva que activa. Pero es una referencia ineludible del elenco de políticos opuestos a la situación. Mitre alertaba sobre los riesgos del «extravío de la vida institucional» al inaugurar el año 1890, al tiempo que prevenía sobre «la crisis comercial que golpea nuestras puertas» (03/01/1890).

Ambos fenómenos se engarzan en la perspectiva del diario. «De la misma manera que el oro ha ido a 120, a 150, a 200 y a 230, subirá a 300 y a 400, por más que esto hoy nos parezca imposible, si continúan prevaleciendo las circunstancias y los hechos que han arraigado en la generalidad un sentimiento de profunda y justificada desconfianza respecto de la administración del país» (24/01/1890). Este es el «crescendo» en que de aquí en más se irán articulando crisis económica y crisis política.

Barroetaveña convoca a la formación de una Unión Cívica Nacional –tal el nuevo nombre del agrupamiento– que constaría con tres niveles de dirección. Una Junta Consultiva integrada por cinco ancianos ilustres: Mitre, B. de Irigoyen, V. F. López, B. Gorostiaga y E. Costa; la Junta Ejecutiva sería presidida por L. Alem, constando de 10 miembros, y, finalmente un Comité de Propaganda bajo la responsabilidad de L. Sáenz Peña. Mitre y varios de los convidados expresaron su reticencia a la estructu-

ra organizativa y a los designados para ocuparla, pero se logró un primer acuerdo en cuanto a retomar la tarea de organización «popular» y que luego surgieran las autoridades y el modelo definitivo de organización. El mayor obstáculo era el des-acuerdo en cuanto a la probable candidatura opositora. Alem se había convertido en el preferido de Barroetaveña, lo que lo separaba tanto del mitrismo como de los católicos de Estrada.

La profundización de la crisis económica hacia fines del primer trimestre, lleva a que la Unión Cívica trate de recuperar espacio, proponiendo un gran acto de rechazo al Juarismo. Esta vez, Mitre se contará entre los «prohombres» que dirijan la palabra a cerca de 10.000 personas reunidas en el Frontón Buenos Aires, el domingo 13 de abril al mediodía. Mas precisamente, será el primero en tomar la palabra:

«Orden general: todos cubiertos menos el orador que se dirige al pueblo soberano, ausente en los comicios, pero presente aquí hoy».

Su figura, su voz ya apagada por los años, el respeto casi reverencial que siente por él parte de la ciudadanía porteña hacen que su intervención sea portentosa. Por supuesto, en su discurso trata de descentrar al movimiento de la opinión anti-gubernista, expresado en la reunión, de cualquier hegemonía juvenil. «No es ésta una reunión de partido, ni tampoco una coalición de partidos. Es una asociación de voluntades sanas. [...] Aquí están los hombres representativos de la opinión en el pasado y en el presente que, divididos a veces por cuestiones transitorias, están unidos en un solo propósito». Según Mitre, el derecho de reunión es el único que el gobierno no ha anulado todavía, y desde allí cabe resistir para recobrar todos los perdidos. A los jóvenes les corresponde una parte de ese trabajo: «La misión de la nueva generación en esta obra es de lucha y labor».

A su turno, Barroetaveña plegará completamente a la Unión de la Juventud en el reconocimiento a Mitre. «Figura a la cabeza del comité ejecutivo una personalidad argentina cuyo solo nombre significa integridad, civismo y valor bien probado [...] Los prohombres de nuestros partidos tradicionales, han acogido con viva simpatía la presidencia de la junta ejecutiva que la juventud señalaba por él».

Mitre ha logrado entonces ponerse a la cabeza de un movimiento al que hasta entonces sólo había acompañado con su simpatía. Parece perfilarse una nueva oposición bajo su jefatura. El gobierno, atenazado entre la manifestación popular y el derrumbe monetario parece retroceder, y el presidente acepta la renuncia conjunta de los ministros, al tiempo que Cárcano renuncia expresamente a la candidatura presidencial. Tal estado de cosas viene a concluir en una recuperación de fuerzas por parte del tándem Roca-Pellegrini. En consecuencia, las posibilidades de recomposición del PAN se acrecentaban, desde el punto de vista de su capacidad de control de la máquina estatal, al tiempo que los esfuerzos «cívicos» no alcanzaban a tomar

fuerza en el interior del país.

En la coyuntura, Mitre prefiere separarse de la dirección del movimiento, que caso contrario lo llevaría a un nuevo enfrentamiento armado que parece querer evitar. Un viaje a Europa es el modo de dejar expedito el camino a la conspiración.

ARISTÓBULO DEL VALLE Y CÓMO HACER UN GOLPE DE ESTADO

La narración de del Valle nos lleva al momento en que se adopta la decisión de hacer una revolución, hacia fines de 1889, decisión tomada junto a Leandro Alem y otros, en la convicción de que el férreo control que ejercía la máquina gubernativa no dejaba espacio para otros medios de ejercicio de la oposición. Para ello se iniciaron contactos con jefes militares, y especialmente con el Gral. Manuel Campos, hombre vinculado hacía muchos años al Gral. Mitre, quien se manifestó de acuerdo a «entrar en la Revolución». Da comienzo de esta forma una prédica silenciosa «para echar la opinión pública en la dirección del propósito revolucionario, aprovechando las reuniones promovidas por la Unión Cívica de la Juventud».

Apuntemos aquí que en Argentina de 1890 nada tenía de extraordinario, el tratar de organizar una revolución, especialmente en una situación donde se hallaba en juego la sucesión presidencial. Antes al contrario, desde el comienzo del período que toda una tradición historiográfica denominó «Organización Nacional», solamente la sucesión de Roca a Juárez Celman había sido pacífica, y en ello mucho tuvo que ver el fuerte ascendiente que el Gral. Roca tenía en los círculos militares. En todo caso, la atención debería centrarse sobre la forma en que la absorción política de las facciones que se han reunido en el PAN, hacía más improbable que algún jefe político de importancia jugara la carta de la fuerza en la disputa por el poder.

Tal vez valga la pena introducir aquí una breve digresión sobre el carácter «civil» que tiene la lucha política facciosa, pese a que la recurrencia a la violencia y a las artes guerreras resulta relativamente frecuente. En las luchas facciosas del período posterior a Rosas no hay «espadas sin cabeza». Hasta 1880, las facciones en disputa tienen siempre a su frente a un político notable que ha organizado (o dispuesto) de una fuerza armada para hacer valer sus intereses. Por comparación a los incidentes de la asunción presidencial por parte de Avellaneda o de Roca, la Revolución del '90 tiene como rasgo diferencial el hecho de que los políticos que la impulsan, si bien forman parte de la «sociedad política» a la que nos referimos antes, carecen de envergadura para protagonizar la dirección de un movimiento de tal índole.

Justamente, el Gral. Mitre quien aparecía como el candidato natural a liderar la revolución, y como luego veremos más ampliamente, ha resuelto permanecer al margen de la intentona. La dificultad que ello crea para las fuerzas revolucionarias no es menor, porque a pesar de la calificación de prohombres que Barroetaveña dispensa a Alem, del Valle, Goyena y otros, parece claro que ninguno de los nombrados

alcanzaba una estatura política suficiente como para poner en marcha la maquinaria que hubiera sido necesaria para obtener el derrocamiento del gobierno.

Otro elemento de consideración aquí, resulta de la estructura de las fuerzas militares existentes. En primer lugar, y es uno de los saldos de mayor peso en el largo plazo del conflicto armado de 1880, las milicias provinciales desaparecen o se debilitan hasta el punto de no ser una fuerza capaz de desafiar al Ejército Nacional, lo que a su vez es una limitación fuerte al poder de organizar fuerzas adictas a las facciones enroladas en la lucha por el mando. Más aún, el propio Ejército Nacional, cuya estructura de recursos, está determinada por el Poder Ejecutivo Nacional, se halla en un proceso de reestructuración. Nuevas tecnologías de la guerra que requieren habilidades igualmente nuevas, de un lado, y concentración de la vida política en el PAN y el consecuente desinterés en alinear a quienes disponían de recursos armados en relación particular con las facciones políticas.

La organización del ejército para 1890 es una compleja mixtura de los estilos militares propios de la época de los conflictos facciosos armados, con los efectos que produce el proceso de modernización y formación profesional de los oficiales. Tomando en cuenta el rasgo apuntado en último término, comienzan a desarrollarse nuevos medios de relación con las tropas, si se quiere más «despersonalizado», propio de la nueva forma burocrática que la organización está desarrollando.

Los jóvenes oficiales provenientes de la Escuela Militar, encuentran dificultades a la hora de integrarse en una estructura que anteriormente tuvo otras reglas. Ubicados entre las jefaturas y la tropa, su papel resulta un tanto confuso. Si nos referimos a la tropa, la misma se compone en su gran mayoría de «enganchados». Viejos soldados profesionales, desde hace muchos años integran los cuerpos en donde sirven, con lo que ello implica en cuanto al surgimiento de solidaridades y rivalidades, espíritu de cuerpo y competencia con otros cuerpos del mismo Ejército o la Marina. Por el otro extremo, los jefes, en su mayoría pertenecen a la vieja formación del soldado de las guerras civiles. Su gran tarea «nacional» ha sido la ocupación del Sur, de modo que mantienen entre ellos y con «sus» «chinos», una relación marcada por la experiencia compartida y un sistema de códigos idénticos. Justamente, el Gral. Levalle, ministro de guerra del presidente Juárez Celman, pertenece a este grupo de los jefes veteranos, famoso por su rudeza y por el hondo compromiso que lo unía a sus tropas, que ponía de manifiesto, temerariamente, cada vez que era posible.

Volviendo a nuestro problema, insistimos en que si bien no era mayor la novedad de intentar mover al ejército para ponerlo al servicio de las disputas faccionales, la forma en que las cosas se han modificado obliga a del Valle a desarrollar tácticas que serán más parecidas a los modos de promover golpes de estado en la Argentina posterior, que al de la movilización militar en las luchas políticas previas. En particular, del Valle toma a su cargo la tarea de las comunicaciones con el ejército, de modo que debe iniciar discretas conversaciones de «sondeo» con oficiales de distintos cuerpos y con

ellos lentamente va constituyendo un «mapa de fuerzas» posibles de incorporar a la revolución. Para que el movimiento tuviera cierta andadura era necesario convencer a los posibles participantes en que el mismo tendría posibilidades de éxito.

La primera desconfianza de los militares hablados era acerca de la verdadera magnitud del movimiento. Los oficiales que aceptaban la idea de la revolución querían tener alguna seguridad que si ponían su vida y honor en juego, hubiera al menos chances de alcanzar la victoria. Para ello y a pesar que esto ponía gravemente en riesgo el secreto de la conspiración, del Valle hubo de reunirlos a todos. «Eran por lo menos cuarenta jóvenes, todos decididos, entusiastas, por la causa que habían abrazado». Otra vez aquí vemos aparecer a los jóvenes. Pero también podemos detenernos en cómo del Valle ha llegado a estos jóvenes oficiales. La narración del mismo incluye abundantes detalles que nos muestran que en general los contactos partieron de situaciones familiares (otra vez las familias). Hermanos, primos, los propios padres de los complotados, son una rica dimensión de la trama que permite el contacto y la incorporación de los jóvenes oficiales. Varios de ellos eran parientes de algunos de los más fervorosos integrantes de la Unión Cívica de la Juventud, y por seguro también sus camaradas de los otros ámbitos ya señalados de la vida social de estos mismos jóvenes.

Pero ya hemos indicado que contar con la joven oficialidad de escuela en términos de capacidad de acción militar, a la fecha de la organización del movimiento revolucionario, no era contar con una fuerza decisiva. De modo que era imprescindible anudar relaciones en el nivel de los Jefes y en el de la tropa, lo que requería de otras estrategias. En relación a los jefes, la mayoría de los mismos no desea romper sus solidaridades profesionales –solidaridad profesional que además de ser expresión de la mayor organicidad del ejército como agencia estatal, es también resultado de sólidas relaciones personales–.

Con todo, los revolucionarios cuentan entre sus adictos con alguien que, en última instancia, permitirá el andamiaje de su proyecto: la simpatía del Gral. Domingo Viejobueno que aunque no participará personalmente en el movimiento, en su carácter de Jefe del Parque de Artillería dejará que el mismo se lleve a cabo, y tratará de alejar los elementos claramente afectos al gobierno. En cuanto a la abstención del Gral. Viejobueno, ella también es clave, a la hora de despejar dudas por la dirección militar del movimiento, que queda ahora en manos del Gral. Manuel Campos, militar con idéntico grado al anteriormente nombrado, de larga trayectoria en las filas del mitrismo y que accede automáticamente a la jefatura al resultar ahora el de mayor graduación.

El problema con la tropa es bastante diferente. Antes que otra cosa se teme que desobedezcan a los oficiales, si es que los jefes no participan del movimiento. Ya hemos dicho que entre esta tropa y los jefes mediaba toda una relación de años y luchas que los unía fuertemente. Se teme también a que no muestren ningún en-

tusiasmo por tener que combatir en la misma ciudad. Son dos los antidotos que se arbitran para enfrentar ambos males. De una parte, se intenta que la tropa desde el comienzo «sienta» que está formando parte de una gran revolución popular, para lo cual se conviene en movilizar grupos de civiles que acompañen desde el primer momento a los cuerpos sublevados. Por otra, se adopta como estrategia concentrar todas las fuerzas, militares y civiles, en el Parque para que la visión del conjunto de los movilizados, y especialmente, la evidencia de contar con la artillería, galvanizara los ánimos para el combate.

Debe anotarse que ambas operaciones –allegar civiles a los cuarteles y la concentración de su conjunto en el Parque–, eran totalmente contraproducentes desde el punto de vista militar, dado que harían perder mucho tiempo, alertarían al adversario y amenazaban hacer perder el «factor-sorpresa», imprescindible para el éxito de la intentona dada la inferioridad numérica de los revolucionarios. Si éstas eran las posibilidades y problemas que planteaba la movilización del frente militar, veamos ahora la táctica de los cívicos con respecto a las autoridades legales.

Los complotados en la primera elaboración de su plan preveían la detención de las figuras claves del poder legal; estos eran el presidente y el vice, el presidente del Senado –Roca–, y el ministro de guerra –Gral. Levalle–. Los tres primeros, en orden sucesivo, encarnaban institucionalmente la autoridad legítima. Su prisión, al igual que la del jefe del ejército, Gral. Levalle, privaría de capacidad a las fuerzas gubernistas de proveerse de recursos de auxilio en el interior, lo que acortaría la lucha. Pese a que se consideraba clave en el desarrollo de la acción el poder reducir a los nombrados, pronto asomó la imposibilidad fáctica de llevar semejante misión a cabo en el momento mismo del inicio de la revolución, por lo que dicho plan fue dejado de lado. La complejidad de la maniobra total exige que se la encare en la noche, durante las horas de la madrugada, poniendo en movimiento los militares y los civiles comprometidos de antemano. Sostiene del Valle que «reunidas las fuerzas en la Plaza del Parque y proclamada la revolución, se debía proceder en el acto a la toma de la casa central de Policía, habiendo sido estudiada para determinar los blancos de artillería, y dominar los batallones que no se habían incorporado, pero en cuyo interior había inteligencias».

De acuerdo al segundo plan, los otros cuerpos militares asentados en la Capital, no comprometidos en el movimiento, serían sorprendidos por la revolución y sin claras instrucciones de acción se mantendrían al menos por algunas horas a la espera del desarrollo de los acontecimientos. Eso daría tiempo a que el centro de la acción militar se trasladara hacia la Jefatura de la Policía, bastión decisivo de las fuerzas gubernistas, tanto por las características de su edificación como por el hecho de que la Policía era el cuerpo más adicto a la facción gobernante y el que más rápidamente se iba a movilizar en su defensa.

Como se sabe, el plan revolucionario fracasó. La Revolución quedó encajonada en el Parque, y a pesar del denuedo de los revolucionarios civiles y militares, una vez

sitiados no podrán resistir demasiado. Justamente, el relato de del Valle se carga del mayor dramatismo en el punto de referir la negativa a la rendición de los sublevados cuando se ha acordado el cese de la lucha, y el desarme de los mismos. Las tropas que se han batido con fiereza se niegan a entregar las armas al punto que hacen temer a los líderes revolucionarios otra sublevación dentro de la sublevación.

LEANDRO N. ALEM Y LA COMBINACIÓN CIVIL-MILITAR

La valoración principal de L. Alem es que el pueblo debía ser el elemento decisivo del movimiento revolucionario. Esto implicaba que debían ser fortalecidos los clubes populares vinculados a la Unión Cívica, preparándolos para la acción el día indicado, pues aunque el límite de su influencia no alcanzara más que la ciudad de Buenos Aires, el hecho de que el poder se concentre allí, le proveería al movimiento un alcance nacional. Alem incluso ha tratado de hacer contactos para un levantamiento en algunos puntos del interior, pero ha desistido por carecer de la posibilidad de organizarlos prontamente, aunque confía en que triunfante el movimiento en Buenos Aires los propios pueblos de las provincias se rebelarían imitando al de la Capital.

De todas maneras, a juicio de Alem, el movimiento popular por sí solo no sería suficiente para derrocar al poderoso conjunto de fuerzas que sostiene al gobierno. «Pensaba que debíamos organizar vigorosamente el elemento civil en la capital, pero creía en extremo necesario buscar la participación del ejército en esta obra regeneradora». Para ello contaba con una serie de relaciones en el ejército, las que se habían allegado «naturalmente» al movimiento de los jóvenes, pero a las que sumaría las que resultaban de la acción política de los civiles. A su juicio el movimiento debía consistir en «preparar el espíritu del pueblo para la revolución y buscar el apoyo del ejército». De esta forma el movimiento mantiene inalterable su carácter «popular» –diríamos más precisamente, civil– al tiempo que la fuerza militar lo asiste en su tarea.

«Así pueblo y ejército habrían protagonizado una revolución imponente. La gloria de la jornada sería común y quedaría este precedente histórico de que el ejército no era una máquina automática creada para provecho personal de gobernantes corrompidos, sino el guardián de las instituciones y del honor nacional».

Alem inauguraba de esta forma una reflexión sobre cuestiones que serían decisivas en la posterior vida política argentina: el papel del ejército, de las fuerzas armadas en la vida colectiva. La primera dificultad que enfrenta su obra de regeneración es que no puede ser la propia obra del pueblo, es decir, necesita de un brazo armado; pero también pretende colocar en lugar prioritario a las fuerzas civiles del alzamiento. Esto quiere decir que la obra de regeneración, como él la denomina, exige inicialmente politizar al ejército para que no sea solamente una máquina al servicio de los adminis-

tradores, pero más tarde, triunfante el movimiento regenerador volverlo al segundo plano de guardián de las instituciones, que le ha sido reservado.

Por cierto, la lógica del desarrollo de la revolución tomó otros rumbos. La organización de los civiles resultó poco menos que imposible, al menos con el grado de eficacia y alistamiento combativo, que la cuestión requería. Aunque se pudieran disponer de armas suficientes –y en el Parque de Artillería había tal cantidad–, no cabrá esperar de este «elemento popular» una gran capacidad militar, de modo que su alistamiento se fomenta más que nada para distraer la vigilancia policial y permitir moverse con mayor libertad a los cuerpos militares comprometidos con la revolución. En el Parque se pondrían claramente de manifiesto las dificultades que ocasionaba la presencia de unos 400 civiles. En primer lugar se planteaba un problema de encuadramiento, quiénes dirigirían a esos revolucionarios civiles, qué tareas se hallaban a su cargo. Además ello invertía la lógica inicial del movimiento, en los términos que la había planteado Alem, porque implicaba una necesaria subordinación al mando militar.

La organización de la revolución ha previsto la conformación de un gobierno provisional. La dirección del mismo se ha confiado a Alem, decisión que no fue unánime, aunque se impuso el criterio de que su figura era la única que tenía la posibilidad de aglutinar los distintos elementos civiles movilizados en la destitución del gobierno. Ahora bien, junto con la «autoridad» emanada de la junta revolucionaria civil, existe otra junta revolucionaria militar cuyo liderazgo es autónomo de la anterior y que respeta, como siempre en la institución militar, el sistema de grados. Ya apuntamos que el Gral. Manuel Campos se halla a cargo de esta jefatura militar, pero la exacta relación entre ambos cuerpos no está definida y esta misma indefinición aportaría su carga de infortunio a los complotados.

Dos circunstancias agravantes también deben ser tomadas en cuenta. El Gral. Manuel Campos ha propuesto el nombre de Bartolomé Mitre para presidir la Junta Revolucionaria y el futuro gobierno. Igualmente, el Gral. Campos fue arrestado por las sospechas que tenía el gobierno de su lealtad, y liberado sólo algunas horas antes del estallido del movimiento. Durante todo el tiempo de su arresto –una semana– el movimiento carecía de jefatura militar, lo que llevó a tomar a su cargo estos asuntos al propio Leandro Alem. La circunstancia era extremadamente complicada.

El gobierno sabía que algo se estaba preparando por gracia de una delación, pero tampoco puede dejar de anotarse que las reuniones de los complotados habían sido demasiadas y las necesidades de mantener tal actividad completamente en secreto eran obvias. De todos modos es probable que el gobierno ignorase la magnitud de la operación planificada en su contra, de manera que comienza a ejercer presión sobre los jefes denunciados y los regimientos considerados menos adictos.

Las medidas de la reacción gubernamental fueron la aplicación de arrestos al Gral. Campos y a otro de los complotados, el coronel Figueroa, que obraba como su segundo. La naturaleza de estos arrestos queda revelada por del Valle. Los detenidos recibían tal

cantidad de visitas que a éste le resultó imposible poder estar siquiera un minuto a solas con el Gral. M. Campos, durante el período de su arresto. Un día incluso llegó a verlo a las 7 de la mañana y ya había quien le había ganado el primer turno. Igualmente el arresto permitía salidas de los castigados en visita a sus respectivos hogares. Si tal detalle se incluye aquí es para poner de manifiesto que las informaciones no alcanzaron para alarmar al gobierno. Otra acción del gobierno fue alejar de la Capital al 1º batallón de infantería hacia el norte, por tren.

A pesar de su relativa inocuidad, estas medidas causaban un golpe terrible a la sublevación en marcha. Los arrestos tuvieron lugar el día 18, ocasionando la inmediata suspensión de la acción, prevista para el lunes 21 de julio. El mismo día 21 se produce el traslado del batallón de infantes. La mayor inquietud se produjo en el seno del grupo de militares comprometidos previamente para la acción. La cuestión que les causaba mayor intranquilidad era saber hasta dónde llegaba el detalle de las informaciones oficiales, cuál sería el alcance de los sumarios que se seguirían de las declaraciones de los arrestados y cuál el efecto que el mismo tendría sobre sus respectivas carreras.

El balance que realiza la oficialidad joven que se prepara al levantamiento es que cuanto más se prolongue la indecisión con respecto a cuándo y cómo iniciar la acción, los riesgos de su completo descubrimiento aumentan, de modo que los caminos posibles son, o bien acción inmediata, o bien disolución igualmente inmediata de los contactos y de las «logias» revolucionarias. Esta presión se hace presente en la dirección civil del movimiento, que recurre a medios persuasivos para convencerlos de la espera. Alem sostiene que:

«esta lucha que tenía con mis propios amigos en cada postergación, aun cuando me fatigaba y me obligó a imponer mi autoridad de presidente de la Unión Cívica y de jefe de la revolución, me animaba mucho porque me hacía ver hasta qué extremo estaba decidida a la acción la juventud civil y militar».

Una escena de estas labores de persuasión nos pone de manifiesto el estilo de estas relaciones cívico-militares. Uno de los oficiales jóvenes, el Capitán Roldán se dirige a la Junta para manifestarle que la oficialidad de la Artillería se retira en bloque ante la postergación. Alem se reúne con el oficial en la casa del Sr. Roldán padre, también allegado al movimiento revolucionario y le explica las dificultades. «¿Se imaginan que yo postergo la revolución por temor o por capricho? ¿No ven que hay fuerza mayor que se opone? Conmovido, y llenando de alegría a su noble padre, me interrumpió: No nos separaremos de Ud., doctor». Una vez más vemos aparecer el sistema de las sociabilidades ya apuntadas, la figura paterna, la propia casa familiar del «sublevado» y la relación entre la «juventud» y los «prohombres».

La continuidad de los preparativos revolucionarios dependía de la ubicación de

otro jefe militar dispuesto a tomar el relevo de los arrestados. La elección recayó en el coronel Espina, con el cual se tenían contactos pero no se hallaba integrado a la dirección militar de la sublevación. Esto aumentó el grado de improvisación de las acciones militares previstas, pues el nuevo jefe ni siquiera conocía –peor aún, ni deseaba conocer– el estado de los trabajos revolucionarios entre los diferentes cuerpos armados y prefería anteponer al cuadro de fuerzas adictas existentes, el cuadro de sus propias amistades en los distintos cuerpos. Pese a todo, y ante la falta de alternativas, la junta decide lanzar el movimiento la madrugada del sábado 26 de julio. A los inconvenientes citados debe agregarse que el día anterior había sido liberado el Coronel Figueroa, lo que ponía al movimiento armado en el riesgo de tener dos jefes de la misma graduación y dos planes diferentes de acción.

Este obstáculo finalmente se superó porque el otro arrestado, el Gral. M. Campos quedó igualmente en libertad, de manera que asumió la dirección de las operaciones militares, con lo que la revolución tuvo un inicio bastante coordinado y un desarrollo más o menos acorde con lo planeado. Los civiles acompañaron la salida de los cuarteles; los cuerpos involucrados participaron prácticamente en su totalidad, y en la fría mañana del sábado, casi sin disparar un tiro, sin inconvenientes, se reunieron en la plaza frente al Parque de Artillería el conjunto de los militares y civiles que se hallaban en el secreto de la acción del derrocamiento de Juárez Celman.

Sin embargo, en este punto comienza la discusión entre la jefatura civil –Alem– y el jefe militar –Gral. Campos–, acerca de las acciones a desarrollar. La interpretación de ambos protagonistas difiere, por supuesto, en quién fue el responsable de los errores que condujeron a la derrota del movimiento. Para el Gral. Campos el escollo principal fue el hecho que los grupos de civiles armados, responsabilidad del Dr. Alem, que tenían a su cargo la detención de las autoridades legales no cumplieron su cometido, razón por la cual el gobierno pudo rápidamente reagruparse, detener a las fuerzas revolucionarias y, más tarde, recibir los refuerzos que permitieron la derrota de la misma.

Para Alem, por el contrario, la derrota se debió a que el movimiento no aprovechó el momento inicial en que sus fuerzas se reunieron para inmediatamente llevar a cabo la ofensiva que les hubiera permitido hacerse dueños de la ciudad, y que sus opiniones en tal sentido fueron desoídas por el Gral. Campos, que en lugar de continuar desarrollando el plan de operaciones previstas, prefirió mantener sus tropas en la plaza del Parque de Artillería. Escribe Alem:

«Yo asentí a las modificaciones del plan militar revolucionario, que en aquel momento supremo, me hizo el general de nuestro ejército.[...] Reconozco que fue un error de graves consecuencias, el haber aceptado yo modificaciones al plan militar combinado con todo acierto de antemano; pero como se trataba de operaciones de guerra, a las que el general del ejército ponía tantas objeciones, concluí por ceder».

No es del caso en este lugar, analizar las causas de la derrota militar de la Revolución del Parque, ni el respectivo peso de las responsabilidades de los responsables del movimiento. Sí, en cambio, nos interesa remarcar este aspecto de las relaciones entre civiles y militares, y cómo ellas hicieron posible el encuentro de las fuerzas que confluyeran en la revolución y también fueran el eje de una tensión nunca completamente resuelta y que terminó críticamente en el encierro del Parque de Artillería.

La composición del movimiento originario, ha sido una confluencia entre esa juventud «independiente» de Barroetaveña, con un elenco de dirigentes políticos que ha quedado casi completamente privado de influencia pública durante el gobierno juarizta y cuya exclusión amenaza extenderse en el tiempo. Posteriormente, a ese movimiento político de base «ciudadana» se le han aproximado pequeños grupos de oficiales sin peso en la estructura militar pero dispuestos a derrocar al gobierno por la fuerza, y que convencen a los dirigentes cívicos de la posibilidad de organizar una revolución exitosa.

Aceptada esta vía, el siguiente problema, será cómo producir un movimiento cívico-militar de suficiente magnitud para derrocar a un gobierno que, aunque desprestigiado ante la opinión pública, tiene en su haber una fuerza militar que difícilmente pueda ser desafiada con éxito. Son aquí notables los efectos del aumento de complejidad de la organización estatal, que para el caso se traducen en una capacidad de fuego imposible de derrotar para civiles más o menos bien armados. La consolidación del estado nacional ha determinado que el ejército nacional adquiriera una dimensión tal, que para producir una confrontación con posibilidades de éxito, es necesario desprender a una parte de éste mismo ejército de la lealtad a sus «mandos naturales».

La paradoja que enfrenta entonces el programa regenerativo de Alem y los cívicos es que sin un brazo armado relativamente importante no tienen posibilidades de éxito, pero al mismo tiempo, el control de una fuerza armada de esa magnitud escapa absolutamente a los civiles, para convertirse en «cosa de militares». Si los cantones populares y los grupos de civiles armados «a Remington» que puede organizar Alem, sitúan a éste en la jefatura de una impugnación revolucionaria al orden existente protagonizada por el propio «pueblo», esa fuerza popular no tiene más alternativa que ponerse bajo la disposición de jefes militares. Aun imaginando por un momento que el desenlace del frío y sangriento invierno de 1890 hubiera dado la victoria a los revolucionarios ¿por cuánto tiempo hubiera podido mantenerse Alem en la dirección del movimiento, siendo que ni siquiera lograba hacerse escuchar por los jefes militares y, que para lograr la obediencia de algún «joven oficial» debiera rodearse de toda una estructura «social» –y aquí queremos decir jerarquías familiares y ascendientes de parentescos– que se le imponía por su propio peso?

En este sentido, la Revolución del Parque marca una primicia en la vida política argentina, aunque para esperar la repetición del fenómeno sea necesario dejar pasar

un largo período, y esta primicia es que la fuerza pública del estado, sólo puede ser desbordada por esa misma fuerza pública estatal. Un sistema de comunicaciones moderno, recursos financieros que la ubicaron entre las más poderosas del continente, un sistema de administración castrense fuertemente centralizado y autónomo, su disposición a ejercer la tutela social, todos estos son factores que veremos desarrollarse mejor en la experiencia social-política argentina del siglo XX, pero que han comenzado a hacerse presente desde la Revolución de los «boinas blancas».

Conclusiones

Por cierto que esta lectura que hemos intentado de fuentes de primera mano no podría haber sido hecha, en la forma que ha asumido, sino fuera gracias a una extensa bibliografía que ha proporcionado un sinnúmero de claves analíticas y de información. El detalle de estos textos se encuentra al final. A la serie inicial de «historias» sobre el '90 se le sumaron una serie de relatos más elaborados, al compás de la memoria de otros de sus protagonistas pero también de técnicas historiográficas más desarrolladas. Es indudable que, habiéndose constituido la Unión Cívica Radical en fuerza política central de la Argentina del siglo XX, una buena cantidad de estos textos estuvo organizado por perspectivas favorables o adversas al partido mencionado.

Una historiografía más reciente supera a nuestro juicio estas dificultades, y de ella nos declaramos deudores. Un primer grupo de obras se ha configurado desde el punto de vista de la historia de los sistemas políticos y las prácticas a ellos vinculadas. Varios desarrollos recientes, a veces con preocupación temática y de período diferentes, han enfatizado en el tipo de régimen político de notables que consolida el Roquismo y que se pone en crisis recién después de la ley Sáenz Peña de 1912; al respecto la obra de N. Botana desde hace veinte años es un clásico. M. Cavarozzi (más tipológicamente) ha propuesto una categorización apta para este tipo de regímenes en toda América Latina; mientras que H. Sábato (más en cota de historiadora) ha reconstruido las características de la vida política porteña entre 1860 y los inicios del Roquismo, mostrando la riqueza de los modos relacionales entre gobernantes y gobernados, que luego serán absorbidos por el «ansiado orden».

Lo relativamente curioso a señalar es que para tales interpretaciones, sobre las que hay amplio consenso en su aceptación, la revolución del '90 aparece como un fenómeno tal vez incómodo. Por caso, en el sobresaliente *El Orden Conservador* de Botana, resulta mencionada, como el punto de partida de lo que se caracteriza como un período de impugnación revolucionaria. En un trabajo posterior, realizado junto a E. Gallo, Botana ha subrayado la petición por los revolucionarios de una vida política «exaltante» propia del republicanismo clásico que los diferenciaba del Juarismo (y también del Roquismo) y su visión más «administrativa» del poder, lo que tal vez la convertiría en la última de las revoluciones «antiguas» antes que en la primera de las revoluciones «modernas».

En tal sentido pensamos necesario establecer una distancia entre la fallida Revolución del Parque y la serie posterior de «revoluciones radicales» de los años 1893 y 1905. Creemos que merece esta consideración separada el tipo de movilización capaz de reunir al conjunto del universo político –excluido el Juarizmo– que participó del movimiento. Las revoluciones «radicales» serán justamente eso, movimientos impulsados centralmente por esta facción, mientras las otras fuerzas políticas manifestarán su repudio en bloque, como creemos puede apreciarse en la obra de P. Alonso, que pone énfasis en el camino recorrido por los radicales que sin renunciar a la revolución se integraron a la vida parlamentaria en la misma década del '90.

Otro elemento que nos parece reforzar esta excepcionalidad del '90 es la particular forma de coalición cívico-militar que intentó llevarla a cabo. Cuando vemos que todavía en 1930 el golpista Uriburu le propone la presidencia de la Nación a Lisandro de la Torre, fenómeno inexplicable desde un punto de vista ideológico, nos encontramos con la floración de una veta del acontecimiento que ahora concita nuestra atención, aquellos días febriles en que un joven subteniente y un no menos joven estanciero iniciaban sus vidas políticas compartiendo la angustia del sitio del Parque de Artillería. Esta asociación civil-militar casi no tiene parangón en el período posterior del «ciclo revolucionario».

Otro de los puntos sobre los que lentamente se ha ido produciendo una revisión historiográfica interesante es acerca del sentido económico de la crisis financiera de 1890. Autores «revisionistas» han llegado a proponer una completa reversión de perspectivas considerando por ejemplo –nos referimos a T. Duncan– al Juarizmo como una audaz estrategia de crecimiento acelerado, que trató de utilizar en su favor la situación internacional de liquidez de capitales y con un destino fundamental hacia las obras de reforma estructural. Otras perspectivas, sin ir tan lejos, piensan al noventa antes que como una crisis, como una retracción en el marco de una ascensión demasiado apresurada (Cf. R. Cortés Conde, C. Díaz Alejandro). Por lo demás resulta claro que el crecimiento económico luego de 1893, separa a esta «crisis» de sus análogas de 1930 o de la «Década Perdida» de los pasados años 80, para no hablar de la presente depresión que todavía parece no haber encontrado un nombre característico.

Roberto Cortés Conde dio a conocer *Dinero, deuda y crisis. Evolución fiscal y monetaria en la Argentina (1862-1890)*, donde realiza una cuidadosa reconstrucción de los aspectos financieros del período estudiado. Igualmente creo que en el caso de Cortés Conde se ha tratado de acercarse al problema de un modo más consistente con sus puntos de vista más generales acerca de las relaciones entre mercado-estado y sociedad a la fecha. El trabajo de Cortés Conde es de una magnitud bastante inusual por la cantidad de datos que se han debido revisar y agregar a los efectos de poder obtener un panorama informativo más o menos confiable sobre el que poder desplegar las estrategias analíticas. Se trata también aquí de un trabajo que se instala en una duración más larga en la consideración de las políticas monetarias, las finanzas

fiscales, el crédito externo y el balance de pagos, sin descuidar el análisis de los elementos «reales» de la economía.

Una vez más aquí creo que cabe reunir por el análisis del acontecimiento, los estudios «políticos» con los «económicos», apreciando en su desarrollo el engrane entre crisis política y crisis económica, y que impida la reducción analítica de una a la otra.

Por último, y aunque no sea el eje de las reflexiones que han ocupado a los historiadores recientemente, el juicio sobre los nexos entre orden moral y régimen político también debe ser sometido a críticas. La corrupción, el nepotismo, la especulación financiera, por malos que sean en sí, no son de ninguna manera fenómenos que puedan adjudicarse con exclusividad al Juarismo, y en consecuencia, hacen difícil de sostener que en estos defectos deban encontrarse las razones de su crisis y caída. Podría, en cambio, ser más interesante la exploración acerca de cómo este motivo moral se convertirá en modelo de crítica política y justificativo de otros intentos, estos exitosos, de liquidar un gobierno democráticamente electo. Las dictaduras de Uriburu, Lonardi, Onganía y Videla harían repetidamente impugnaciones de corrupción a sus predecesores legítimos.

Por todo lo apuntado nos ha parecido posible, en tanto criterio investigativo, centrar fundamentalmente el análisis de la Revolución del '90 como resultado político, acción específica de hombres concretos, que en el marco de un sistema político complejo que podemos caracterizar como «régimen oligárquico» y confrontando a una crisis económica, produjeron una situación en cierto modo excepcional. Esto es lo que queremos decir cuando pretendemos que la Revolución del '90 sea reconocida como ella misma, en tanto «acontecimiento».

Esperando, como se dijo más arriba, que la Revolución de 1890 encuentre a su historiador, y con la sola voluntad de centrarnos en el análisis de la comprensión de la especificidad política de la Revolución de julio de 1890, detallamos sumariamente algunas conclusiones:

1. Los verdaderos alcances de la reabsorción de los elencos políticos por el unificado Partido Autonomista Nacional (PAN) no alcanzan con todo a absorber el conjunto del personal político. La presente investigación avanza en reconocer mejor el papel del mitrismo, en cuanto canal abierto y paralelo, que a pesar de su posición subordinada cumple un papel amortiguador. Nótese que la Revolución se pone efectivamente en marcha cuando Mitre percibe que el desarrollo de los acontecimientos conduce a una colisión con el oficialismo que no está dispuesto a liderar, por lo que decide ausentarse.

Es bastante claro el papel jugado por La Nación en la agitación previa el lanzamiento de la revolución, así como que también un importante número de los civiles agregados al movimiento del '90 lo hicieron por una adhesión previa al ex-presidente. Además, recordemos la posterior candidatura mitrista y que quienes continúen su identificación como «Cívicos» serán sus seguidores.

2. El análisis de la Revolución del '90 nos muestra las violentas tensiones que el sistema político sufre con motivo del desenvolvimiento económico. En la vorágine expansiva

las distintas organizaciones mediadoras entre sociedad civil y sociedad política están sometidas a igualmente rápidas transformaciones. Incluso concediendo que en esta etapa la sociedad política domina férreamente a la sociedad civil, se hacen necesarias la utilización de nuevas técnicas de poder para dirigir una sociedad que deviene aceleradamente en sociedad de masas y donde la fuerte presencia de inmigrantes enfatiza la ausencia de hábitos comunes de socialización. La acción de los «círculos» políticos tradicionales no alcanza para encuadrar las energías de nuevos grupos, como los trabajadores, o los jóvenes.

3. El Juarizmo intentó poner en marcha una nueva clase de dirigencia política, promoviendo algunos cambios en la estructura de la notabilidad política como consecuencia del afianzamiento de la estructura burocrática e institucional y de la necesidad de recurrir a especialistas. Resulta en tal sentido una vuelta de tuerca en el marco del sistema de «gobierno elector» característico del régimen oligárquico. De esta forma predomina la maquinaria y se van disminuyendo las posibilidades del político independiente, del orador y del publicista-escritor en tanto carreras de base hacia el predicamento político. Lentamente, este sistema se modifica en favor de otro que reposa en carreras hechas en nombre de la lealtad en un sistema de relaciones políticas personalizado. El desprestigio del Juarizmo es consecuencia de la terrible crisis económica que ayudó a producir y que enfrentó sin éxito, pero también es efecto del hecho que su innovador estilo político, prescinde de las notabilidades tradicionales, e intenta reemplazarlas por recién llegados sin otros antecedentes que la lealtad facciosa lo que provocó violentas reacciones.

4. En cuanto al papel de la juventud, los revolucionarios del '90 valoraban a este grupo como su capital fundamental. Intentaron fundar un nuevo estilo de sociabilidad política adecuado a la modernidad de los tiempos, negándose al «posibilismo» e imitando el radicalismo de las juventudes extranjeras. La juventud debe cumplir el papel de renovadora. Para ellos, por el contrario, el Juarizmo representaba la continuidad de viejos hábitos que debían ser quebrados,

5. Junto al papel de la juventud debe ser resaltado el papel de otros ámbitos de sociabilidad. Entre ellos, las relaciones familiares, el ámbito universitario, el mundo de la prensa y el periodismo, los lugares de la tertulia, en cuanto ámbitos específicos de la elaboración del «sentido común» de la vida política de la época. Esto no significa negar la posibilidad de su consideración como «clase» dominante en el sentido político o económico, pero aquí hemos intentado enfatizar al sitio de reunión como ámbito de producción de determinada sensibilidad, antes que considerarlo el resultado de determinaciones derivadas de los clivajes sociales.

6. La revolución del '90 careció de jefes capaces de congregarse ese mismo grupo de opositores revolucionarios. Mitre, candidato a encabezarla decide alejarse, dejando el movimiento en manos de del Valle y Alem, quienes son hombres de prestigio y con galones acuñados en la política facciosa pero que jamás alcanzaron el rango de notabilidad necesaria para poner en marcha una operación de movilización militar y civil. El propio del Valle hubiera preferido a V. F. López como jefe, mientras que el

jefe militar Gral. Campos, nunca dejó de pensar en Mitre (o, incluso, en él mismo). Tal falta de conducción implicó que la revolución en marcha con alguna probabilidad de éxito inicial se estancó por falta de acuerdo en los objetivos políticos de los participantes. En cuanto al liderazgo de Alem podría conjeturarse que todo lo que aportaba, energía, cierto apoyo popular y civil, admiración entre los jóvenes, eran elementos que lo separaban del grupo de los «prohombres» de los que dependió, en última instancia, la suerte de la revolución.

7. La diferencia entre civiles y militares, hasta el Roquismo, tiene un carácter sobre todo funcional. La forma militar de resolución de los diferendos políticos liga profundamente a los dirigentes dentro y fuera del ejército. Ningún liderazgo «civil» se produce sin fuerte apoyo dentro del ejército. No obstante, éste deviene de más en más Ejército Nacional y su organización para 1890 es una compleja mixtura de los estilos militares heredados de los conflictos facciosos, junto con los efectos de profesionalización que produce la modernización técnica y la formación académica de los oficiales. Ello resulta en una complejización de las relaciones entre militares y civiles que hemos tratado de incorporar al análisis de la Revolución del '90.

8. La modernización militar desarrolla un tipo de relación entre oficiales y tropas cada vez menos «personalizado». En los casos en que los jefes pertenecen a la vieja formación del soldado de las guerras civiles, la tropa se compone de enganchados que desarrollan con su jefe un auténtico estilo de solidaridad y competencia frente a otros cuerpos. La nueva oficialidad de carrera prioriza su especialización profesional y un nuevo concepto de disciplina que explica, en parte, las adhesiones diferenciales que el movimiento genera entre los oficiales.

9. Las invocaciones al pueblo por parte de los revolucionarios del '90 son un elemento clave de legitimación de su propio accionar. Merecen ser mejor revisadas las distintas acepciones posibles de ser identificadas alrededor de la noción de pueblo. Puede sostenerse que las consideraciones sobre el «pueblo» no se refieren en 1890, a personas que estuvieran ubicadas por debajo de este grupo de sociabilidad antes identificado. No parece que la queja revolucionaria de 1890 esté reclamando un tipo de participación política de amplitud análoga a la que resultó de la reforma de 1912. En este sentido el '90 vendría a ser consecuencia de la clausura de algunas de las vías de la notabilidad política propias del interior de este grupo de sociabilidad.

Bibliografía

- AAVV (1940): *La revolución del '90*, Buenos Aires, Claridad.
- AAVV (1957): *Revista de Historia*, N° 1, Buenos Aires (Número dedicado a la Revolución del '90).
- Alonso, Paula (2000): *Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años noventa*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Ansaldi, Waldo (1990): «El Parque de los senderos que se bifurcan», en: *La Ciudad Futura*, N° 23/24, Buenos Aires
- Balestra, Juan (1987): *El noventa. Una evolución política argentina*, Buenos Aires, Hyspamérica.
- Barroetaveña, Francisco et al. (1890): *Unión Cívica. Obra oficial*, Buenos Aires.
- Botana, Natalio (1986): *El orden conservador*, Buenos Aires, Hyspamérica.
- Botana, Natalio y Gallo Ezequiel (1997): *De la República posible a la República verdadera*, Buenos Aires, Ariel.
- Cavarozzi, Marcelo (1978): «Elementos para una caracterización del capitalismo oligárquico», en: *Revista Mexicana de Sociología*, México.
- Cortes Conde, Roberto (1989): *Dinero, deuda y crisis. Evolución fiscal y monetaria en la Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Díaz Alejandro, Carlos (1981): *Ensayos sobre historia económica argentina*, Buenos Aires, Amorrortu.
- Duncan, Timothy (1983): «La política fiscal durante el gobierno de Juárez Celman, 1886-1890. Una audaz estrategia financiera internacional», en: *Desarrollo Económico*, N° 89, Buenos Aires, Ides.
- Ford, Alec (1969): *El patrón oro: 1880-1914. Inglaterra y Argentina*, Buenos Aires, ITDT.
- Herz, Enrique (1991): *La Revolución del '90*, Buenos Aires, Emecé.
- Matienzo, José (1926): *La revolución de 1890 en la historia constitucional argentina*, Buenos Aires.
- Mendia, J.M. (1890): *La revolución. Su crónica detallada. Antecedentes y consecuencias*. Buenos Aires.
- Sabato, Hilda (1998): *La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Sabato, Hilda (1990): «La Revolución del '90 ¿prólogo o epílogo?», en: *Punto de Vista*, N° 39, Buenos Aires.
- Sabato, Hilda y Cibotti, Ema (1990): «Hacer política en Buenos Aires. Los italianos en la escena pública porteña», en: *Boletín del Instituto de Historia E. Ravignani*, N° 2, Buenos Aires, UBA.
- Sabato, Hilda y Palti Elías (1990): «Quién votaba en Buenos Aires», en: *Desarrollo Económico*, N° 119, Buenos Aires, Ides.
- Sommi, Luis (1948): *La Revolución del 90*, Buenos Aires, Monteagudo.
- Terry, José (1893): *La crisis 1885-1892*, Buenos Aires, Biedma.
- Vedia y Mitre, M. (1929): *La Revolución del 90*, Buenos Aires.

Registro bibliográfico

HOURCADE EDUARDO

"Acontecimiento en primera persona. La Revolución del 90' escrita por sus protagonistas", ESTUDIOS SOCIALES. Revista Universitaria Semestral, Año XI, N° 21, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional del Litoral, segundo semestre 2001 (pp. 29-53)

Descriptores:

Revolución del '90 - Unión Cívica - Radicalismo - Alem - Mitre - Del Valle - Barroetaveña